



INFORMATIVO IMPRESO DE ATTAC MADRID. Nº 12. MAYO Y JUNIO 2007

Colombia se desangra, Repsol se enriquece

Los vínculos de la transnacional española con los paramilitares

A pesar de que Repsol extrae una importante cantidad de petróleo de Colombia, y en su informe de actividades se precia de sus prometedoras áreas de exploración y explotación petrolífera, la multinacional española no tiene oficinas comerciales, ni sede oficial en este país; ni su logotipo ni su nombre aparecen en los pozos, estaciones de bombeo o camiones que transportan el petróleo.

¿Qué lleva a la mayor petrolera de América Latina a trabajar en estas condiciones de clandestinidad en Colombia?

La respuesta hay que buscarla sin duda en el especial vínculo que la actividad petrolífera mantiene en Colombia con la militarización y paramilitarización de amplias regiones, los desplazamientos forzados masivos de la población local, la brutal violencia dirigida contra las organizaciones sociales, los fatales efectos en las comunidades indígenas y los desastres medioambientales. No es de extrañar que la multinacional desee distanciar su imagen corporativa de este cenagal, manteniendo sin embargo intacta su capacidad de sacar máximo beneficio de todo ello.

En ningún otro lugar es este hecho más llamativo que en Arauca, departamento petrolífero por excelencia, en el que se



Protesta en Colombia contra Repsol

vive una de las situaciones humanitarias más dramáticas de Colombia, por el número de homicidios, masacres, desapariciones, detenciones arbitrarias y otras violaciones a los derechos humanos. Arauca es un departamento de donde se extraen grandes riquezas, mientras que un 70% de su población se encuentra en situación de pobreza. Es en este departamento donde Repsol centra su actividad, participando de una u otra forma en todos los campos petrolíferos de la región. Sin embargo su presencia se mantiene invisible.

Las operaciones de Repsol en Arauca

Repsol opera en Arauca en consorcio con la transnacional estadounidense Oxy en campos como los de Cravo Norte o Rondón, asociada a la empresa estatal

continúa en página 3

Susan George, Doctora Honoris causa por la UNED

La analista política y filósofa Susan George, activa opositora a las políticas neoliberales, ha aprovechado su paso por Madrid al recibir el Honoris Causa por la UNED, para participar en diferentes foros de debate. En ellos recordó la importancia de los impuestos a la hora de luchar contra las desigualdades sociales, y advirtió de que la evasión fiscal de los más ricos la acaba pagando el resto de la población.

sigue en página 8

Attac protesta durante la lectura del Quijote

Alrededor de treinta jóvenes, miembros del Grupo de Activismo Social (GAS) de ATTAC, interrumpieron con un manifiesto la lectura continuada de El Quijote, programada en el Círculo de Bellas Artes con motivo del Día del Libro. El GAS protestaba así contra la aprobación del Dictamen sobre el Proyecto de Ley de la lectura, el libro y las bibliotecas.

sigue en página 8

Paraísos Fiscales, ¿hasta cuándo?

Carlos Jiménez Villarejo

Recientes investigaciones judiciales han vuelto a revelar la realidad de esos territorios, incomprensiblemente llamados paraísos por el ordenamiento jurídico, como destino de los capitales de origen ilícito. Su constante presencia ante cualquier forma de delincuencia económica parece que no resulta suficiente para tomar medidas más drásticas que las adoptadas hasta ahora por el Gobierno y la comunidad internacional. Por lo visto, no bastó el informe publicado por la OCDE en el año 1998, en el que se señalaba que esos paraísos "erosionan las bases impositivas de otros países, distorsionan los patrones de comercio e inversión y minan la justicia, neutralidad y amplia aceptación

continúa en página 2

además...

artículo de Nicolás Angulo Sánchez sobre comercio y desarrollo

declaración de Lisboa

reportaje: los pretorianos en Washintong

attac madrid

OTRO MUNDO ES POSIBLE

¿Quiénes somos?

“Otro mundo es posible. El actual, regido por el liberalismo económico generalizado y la dictadura de los mercados que tienden sus redes a escala planetaria, se nos presenta cargado de amenazas...”. De este modo comienza el manifiesto de ATTAC Madrid que pretende ser una alternativa esperanzadora que nos permita retomar la certeza de que otro mundo es posible. ATTAC es un movimiento internacional por el control democrático de los mercados, vertebrado en torno a los siguientes objetivos:

- 1º.- Recuperar, y ampliar, los espacios perdidos por las colectividades en beneficio del poder financiero.
- 2º.- Oponerse a toda nueva renuncia de competencias por parte de los Estados que tienda a privilegiar el derecho de los inversores o mercaderes.
- 3º.- Definir y construir, en suma, un orden socioeconómico más democrático a nivel mundial.

¿Cómo estamos organizados?

-La Junta Rectora tiene 13 miembros Se reúne los primeros martes de cada mes, en sesiones abiertas a todos los asociados que quieran asistir Dentro de la Junta las responsabilidades se reparten entre:

- El Presidente y Vicepresidentede, responsables de convocar, elaborar el orden del día, y dirigir los debates.
- Vocales responsables de la coordinación y desarrollo del Área de Extensión y Comunicación
- Vocales responsables del Área de Observatorios y Campañas
- Vocales responsables de la coordinación con Attac España y de atender las relaciones internacionales.

editorial

El tiempo del liberalismo

La Historia, como tal, es larga y cubre en el tiempo períodos mucho más prolongados que los que abarcan nuestras cortas existencias personales. Por eso cada generación, y varias generaciones sucesivas, están sujetas y algunas veces condenadas a vivir tiempos dominados por una determinada ideología que preside la configuración de la Sociedad. Para mal de muchas y de muchos, para sufrimiento de los pueblos y para dolor de la Tierra, este parece ser el caso del liberalismo que impone su dogma implacable y parece difícil contestar su dura omnipresencia .

En este contexto que afecta a todos los ciudadanos y daña a todos los lugares, aparece en el Sur, en la provincia de Cádiz, la dura realidad de la aplicación estricta de la racionalidad económica pura y dura por parte de una multinacional que fabrica componentes para la industria de automoción Se trata de Delphi, que aunque obtuvo enormes beneficios en el pasado ejercicio, huye hacia otros paraísos mercantiles aún más lucrativos y pretende dejar en el paro y sumir en la pobreza a cientos de hombres y de mujeres de esa región ya vapuleada por mil reconversiones navales y terrestres una región concienciada y crítica en el mejor sentido del término y seguramente también por eso duramente castigada

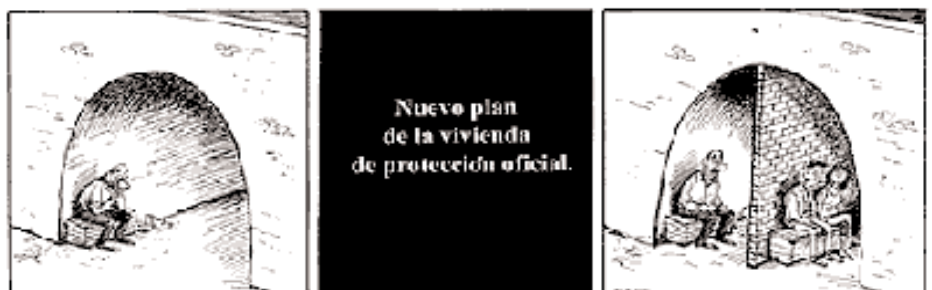
Junto a Cádiz el Atlántico, y en su otra orilla, la nación imperial, ese país de inmigrantes que pone muros a la inmigración; y en ella, como en la antigua Roma, los Pretorianos, la guardia militar que al mismo tiempo aseguraba y amenazaba al propio Imperio; vemos cómo, paulatina pero incasablemente, el estamento militar avanza en la toma del poder dentro de la sociedad estadouni-

dense y desde el cine de masas hasta la simbología popular, lo militar adquiere verdadero papel determinante: tras Vietnam hubo una cierta sordina en el triunfalismo, pero ahora se vuelve a las victorias aunque se haya cambiado la cara, la lengua y el nombre del enemigo.

En estos tiempos liberales el tema de Europa está siempre ahí como santo y seña de un propósito irrenunciable de las élites del poder, pero también como conciencia crítica de muchas y muchos que luchan por algo mejor y más humano, y lo proclaman desde Lisboa la bella ciudad desde donde en el 2000 se proclamó el más duro plan de liberalización y competitividad, esa Lisboa de 2007 nos redimirá de la de siete años atrás

En la Economía brillante está sin duda REPSOL, la multinacional española que a veces actúa con su nombre a las claras y a veces como en Colombia extrae el oro negro oculta bajo el paraguas protector de una firma americana como OXY para sufrimiento de muchos y grandes beneficios para los de siempre. Pero a pesar de tantas prospecciones y tantos bombeos resulta que el petróleo va resultando caro y, además se encuentra en áreas del mundo no muy amigas de los gigantes del voraz consumo, por eso, y no por prejuicios ecológicos el poder económico planetario ha optado ya por introducir los biocombustibles, pues en el fondo lo que no se quiere es cambiar el modelo de sociedad y en ésta el automóvil privado es una pieza esencial que debe ser alimentada, por eso reunió Bush a los grandes de Detroit

Otro mundo es y debe ser posible y como algunos dicen hay que esperar aunque las esperanzas sean pocas. Pero desde luego si luchamos todos las esperanzas aumentarán.



Recientes investigaciones judiciales han vuelto a revelar la realidad de esos territorios, incomprensiblemente llamados paraísos por el ordenamiento jurídico, como destino de los capitales de origen ilícito. Su constante presencia ante cualquier forma de delincuencia económica parece que no resulta suficiente para tomar medidas más drásticas que las adoptadas hasta ahora por el Gobierno y la comunidad internacional. Por lo visto, no bastó el informe publicado por la OCDE en el año 1998, en el que se señalaba que esos paraísos "erosionan las bases imponibles de otros países, distorsionan los patrones de comercio e inversión y minan la justicia, neutralidad y amplia aceptación social de los sistemas fiscales en general. Tal com-

"El Gobierno no ha luchado contra la existencia de cuentas bancarias en filiales de bancos españoles"

petencia fiscal nociva disminuye el bienestar global y vulnera la confianza de los contribuyentes en la integridad de los sistemas fiscales".

Como tampoco parece que bastara el informe del Banco de España del 2004, sobre la presencia de la banca en los que llamaba, evitando su verdadera denominación, "establecimientos off-shore" (en ultramar). La autoridad monetaria reconoció lo que era y es un secreto a voces: que

"En España están censadas 45.800 empresas inmobiliarias, de las que solo 4.600 tienen más de tres empleados"

la banca desarrolla a través de sus filiales en dichos centros actividad propia de banca privada con residentes españoles, que los fondos captados en dichos centros se remansan, y que hay serios problemas en "la identificación precisa y documentada del cliente final" de los depósitos fiduciarios constituidos por las filiales off-shore del grupo. Y recomendaba un cierto distanciamiento de la banca respecto de esos territorios con el propósito de "minimizar los riesgos legales y de reputación en que se incurre con las actividades realizadas en establecimientos off-shore". Además, requería a los administradores que el "objeto social y las actividades que puedan llevarse a cabo en un centro off-

Paraísos Fiscales, ¿hasta cuándo?

Carlos Jiménez Villarejo

shore deben estar claramente identificados y definidos". Pero las cosas no han cambiado sustancialmente. El grupo SCH, según el informe presentado a la autoridad bursátil de Estados Unidos para el ejercicio del 2005, declaró 609 filiales, 51 de ellas en paraísos fiscales (8,4%). Y el BBVA, según el informe del ejercicio del 2005, declaró 310 filiales, 29 de ellas en dichos territorios (9,35%).

Pero las alarmas se dispararon cuando, el año pasado, la OCDE valoró negativamente la política española antiblanqueo. El informe denuncia el incumplimiento

por parte del Gobierno de algunas de las 40 recomendaciones para prevenir el blanqueo de capitales. Cabe destacar dos de los déficits señalados porque reflejan la debilidad del sistema frente a dicha actividad delictiva. Así, se denuncia la falta de una adecuada supervisión de las actividades de los despachos de abogados, notaría, inmobiliarias, registradores, asesores, joyeros y casinos, en cuanto todos están específicamente obligados a cooperar

contra el blanqueo de capitales.

Entre los años 2001 y 2004, todos esos colectivos habían denunciado solo 18 operaciones sospechosas. Es un dato ya sorprendente. Máxime cuando, según la OCDE, en España están censadas 45.800 empresas inmobiliarias, de las que solo 4.600 tienen más de tres empleados. Y continúa denunciando que no se había hecho ninguna inspección hasta esa fecha de los auditores, abogados, asesores y notaría. Y que solo habían sido investigadas 14 de las 6.500 instituciones financieras censadas en España.

El informe prosigue señalando, entre las deficiencias del sistema, el consentimiento de que las instituciones financie-

ras, especialmente las entidades de crédito, mantengan relaciones de corresponsalía con bancos pantalla, evidentemente en paraísos fiscales, y exige asegurar que las filia-

les bancarias en estos territorios cumplan, como exige la ley de prevención de blanqueo, los sistemas de control interno que permitan detectar las operaciones sospechosas.

Es decir, queda acreditado y ahora denunciado a escala internacional lo que ya era evidente: que el Gobierno no cumple rigurosamente con el control de las sociedades y cuentas de las corresponsalías bancarias en los paraísos fiscales. El Gobierno ha reaccionado limitadamente con la aprobación de la ley de medidas de prevención del fraude fiscal, donde finalmente se reconoce que el fraude fiscal "supone una merma para los ingresos públicos", que "afecta a la presión fiscal que soportan los contribuyentes cumplidores" y que es "el principal elemento de inequidad de todo sistema tributario". Se adoptan ciertas medidas en relación con los paraísos fiscales y el sector inmobiliario. Y, sobre todo, se aprovecha para reformar y controlar más eficazmente la actividad notarial, todavía regida por una ley de 1862. Reforma que, incomprensiblemente, ha encontrado resistencias en esa vetusta corporación.

El decano del Colegio de Notarios de Madrid ha advertido de los riesgos que representa para la función del notariado que se abra "en la reserva del protocolo un portillo para que pasen libremente por él no solo los funcionarios encargados de atender emergencias, sino las administraciones tributarias" de cualquier grado, con el riesgo evidente de que pida también esa llave cualquier otra autoridad administrativa, como si el notario formara parte del organigrama del Estado y los protocolos fueran un archivo público. Y aquí debe haber una raya roja que es preciso respetar".

Pues sí, habrá que traspasar muchas líneas rojas si realmente quiere acabarse con esos llamados paraísos, que lo son sobre todo para los delincuentes, como refugio de capitales fruto del fraude y de toda clase de tráficos ilícitos.

Carlos Jiménez es exfiscal anticorrupción y forma parte de Comité de Apoyo de Attac,

Repsol se asoció en Colombia con una compañía que apoya a grupos paramilitares

viene de la primera hoja

Ecopetrol en campos como los de Catleya, y en solitario en Capachos o San Miguel. En todas estas operaciones se beneficia sin escrúpulos de los efectos que el terror paramilitar, integrado en la estrategia represiva del Estado, ha introducido en la sociedad araucana: el desalojo forzoso de población campesina e indígena que residía en la vecindad de los futuros campos o de los oleoductos, o el debilitamiento de las voces críticas a la actuación de las petroleras, entre ellas las de las comunidades indígenas, U'was y Guahibas, que se han declarado repetidas veces contrarias a las operaciones en sus territorios, las de los activistas sindicales que luchan por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores o las de aquellos líderes sociales que abogan por un mayor reparto social de las riquezas generadas por el petróleo.

Repsol se introdujo en Arauca en asociación con la Oxy, compañía que sostiene un historial de apoyo y financiación a las unidades militares más vinculadas a violaciones sistemáticas a los derechos humanos, como la XVIII Brigada del ejército, a la que Repsol también financia a través de convenios de seguridad. Hay que resaltar también la coincidencia espacial y temporal entre la actividad petrolera de Repsol y el accionar de grupos paramilitares, así en torno al campo de Capachos es donde se están produciendo últimamente las más graves violaciones a los derechos humanos llevadas a cabo por el paramilitarismo.

Repsol se beneficia de que el Estado colombiano identifica los intereses de las compañías petroleras con el "interés general de la nación", a sostener por encima de los derechos de las comunidades indígenas, a las que niega el derecho legalmente instituido a la "Consulta Previa". Las comunidades indígenas U'wa y Guahiba ven amenazada su propia supervivencia, debido a los desplazamientos, a la militarización de sus territorios, a los efectos de distorsión socio-cultural que esta actividad introduce en las comunidades y a las consecuencias medioambientales que ponen en peligro los ecosistemas en los que subsisten.

Las operaciones de la Repsol en



Protestas contra Repsol

Arauca ocasionan efectivamente desastres medioambientales asociados principalmente a los derrames de crudo y al uso desmedido de recursos naturales limitados, como es el caso del agua usada para la extracción, que termina contaminada y desechada en lagunas y corrientes cercanas a los campos. En algunos casos se acaba destruyendo los ecosistemas locales, como sucedió con la laguna de Lipa, resultado de las operaciones en Cravo Norte.

La actuación global de Repsol.

El caso de las operaciones de Repsol en Colombia, a pesar de su dramatismo, no es un hecho aislado. Repsol desarrolla sus actividades por todo el mundo. Sólo en América Latina y el Caribe, opera en 14 países. La compañía obtuvo en 2005 un beneficio récord de 3.120 millones de euros, un 27% más que el año anterior. En torno al 80% de estos resultados provienen de América Latina.

La experiencia de la actividad de esta petrolera en otros países del continente como Argentina, Ecuador y Bolivia, también está ligada a violaciones de los derechos de los pueblos indígenas, al fomento de la corrupción, así como al deterioro irreversible de los entornos sociales, culturales y ambientales, donde opera.

Recordemos en este sentido que Repsol está encausada en Bolivia por contrabando y falsificación de documentos y en Argentina por delito medioambiental en territorio mapuche.

El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) Colombia - Audiencia Petrolera

En Agosto del 2007, se llevará a cabo en Bogotá la Audiencia Petrolera del Tribunal Permanente de los Pueblos, que juzgará la política de la Occidental Petroleum (Oxy), la Repsol y la British Petroleum (BP), por los impactos lesivos de sus operaciones en la población colombiana. El TPP es un instrumento internacional de búsqueda de verdad, justicia y reparación a las víctimas, que tiene ya más de treinta años de existencia; constituido al margen de las estructuras judiciales de cualquier país, representa la conciencia ética de los pueblos, la conciencia ética de la humanidad.

En Junio de este mismo año se realizará en Madrid una audiencia preliminar sobre el caso específico de la Repsol, como parte del proceso de preparación de la Audiencia de Bogotá. Miembros de la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia (Amnistía Internacional, Cedsala, CEAR, Colectivo Sur Cacarica) han pintado un mural en el nuevo cauce del río Turia para protestar.

El ejército y el complejo industrial del armamento han ido ganando un protagonismo creciente en la sociedad estadounidense, que se ha traducido en un mayor poder político

Los Pretorianos en Washington

Se puede hablar de la subida al poder de una auténtica corte formada por pretorianos. No es casualidad que casi todos los jefes del gobierno Bush estén íntimamente relacionados con el complejo militar-industrial del país norteamericano. El ejército y el complejo industrial del armamento han ido ganando un protagonismo creciente en la sociedad estadou-

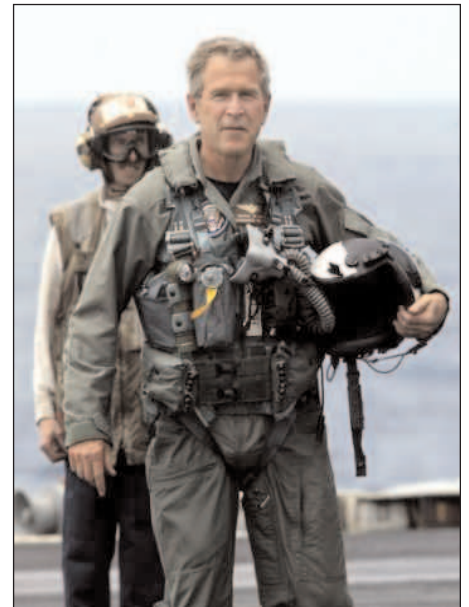
nidense, que se ha traducido en un mayor poder político. Este poder político atrincherado en el ala derecha del partido republicano se ha ungido como el representante de los valores tradicionales estadounidenses. Con la llegada del presidente Bush a la Casa Blanca se puede hablar de la subida al poder de una auténtica corte formada por pretorianos.

El Pentágono, al ampliar el significado de la seguridad nacional para que abarque el contraterrorismo y el control de la inmigración, campos en los que ahora participa activamente, se ha introducido en asuntos de política interna. La lucha antiterrorista es una noción sumamente flexible que ha abierto la puerta a los abusos de unas fuerzas armadas ambiciosas y poco escrupulosas. El estamento militar ha expandido sus funciones en detrimento de otras parcelas del gobierno. En el verano de 2002, el gobierno Bush ordenó a los abogados de los departamentos de justicia y de defensa que revisaran la ley Posse Comitatus y cualquier otra que pudiera limitar la participación de las fuerzas armadas en la defensa y promoción del cumplimiento de la ley interior del país. En virtud de ello el Departamento de Defensa ha redactado órdenes de servicio para responder a lo que denomina CIDCON (situación de desorden civil). Para respaldar esta orden, el Departamento de Defensa creó un nuevo mando militar regional para la protección de Norteamérica, comparable a los existentes para la defensa de Latinoamérica, Europa, Oriente Próximo y el Pacífico. El poder de los comandantes militares regionales (CINC), que están al mando de estas regiones es enorme. Un CINC rinde cuentas directamente al presidente y al Secretario de Defensa, pasando por alto a los jefes de los distintos cuerpos y a la cadena de mando usual.

El Pentágono, también, ha logrado del Departamento del Tesoro que toda adquisición extranjera significativa de empresas estadounidenses deba someterse a un examen de seguridad nacional. Tal es así, que dicho organismo tiene que notificar al Pentágono, obligatoriamente, todas las adquisiciones realizadas por extranjeros por valor superior a los cien millones de dólares. Lo mismo ha ocurrido con los

recursos. Además, los militares han conseguido tener una voz mucho más fuerte en el Comité de Inversiones Extranjeras de Estados Unidos (CFIUS). En lo que respecta al ámbito internacional, el anterior mandatario del Pentágono, Donald Rumsfeld, persiguió con ahínco el que las fuerzas de operaciones especiales del ejército desplazaran a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en su papel tradicional en la dirección y ejecución de las operaciones encubiertas en el extranjero. Sus esfuerzos no han sido vanos y en tiempos de la “guerra contra el terrorismo” las funciones de los militares se han ampliado y les ha otorgado jurisdicciones que antes eran casi en su totalidad territorio civil. De hecho, se les asignó el mayor incremento de gastos en el presupuesto de defensa de 2003 (un aumento de cerca del 20%, hasta alcanzar los 3.800 millones de dólares).

El presupuesto de defensa no ha parado de crecer y ello ha ido en detrimento de las asignaciones presupuestarias de otros departamentos. Por ejemplo, en 2003, el 93% de las asignaciones presupuestarias destinadas a los asuntos internacionales han ido a parar a los militares y sólo el 7% al Departamento de Estado. Para justificarlo se aduce que el dominio militar permanente del mundo es un negocio caro y no les falta razón. El US. Army tiene 480.000 miembros, la US. Navy 375.000, la US. Air Force 359.000 y la infantería de marina 175.000, sumando un total de 1.389.000 hombres y mujeres en servicio activo. En 2003, la nómina de ese personal ascendía a 27.100 millones de dólares en el US. Army; 22.000 en la US. Navy; 22.000 en la US. Air Force y 8.600 en la infantería de marina. Para el año fiscal 2003, el proyecto de asignaciones militares, que se firmó el 23 de octubre de 2002, ascendía a 354.800 millones de dólares. Para el año fiscal 2004, el Departamento de Defensa solicitó al congreso que ese



George W. Bush de uniforme

importe se elevara hasta los 379.300 millones de dólares, lo que se le concedió, además de los 15.600 millones para los programas de armas nucleares que administra el Departamento de Energía y de los 1.200 millones para la Guardia Costera. El importe total asciende a 396.100 millones de dólares. Esas cifras no incluyen los presupuestos de los servicios de inteligencia, ni los gastos derivados de la invasión de Iraq, ni la solicitud adicional del Pentágono de 10.000 millones de dólares para la lucha contra el terrorismo. Gran parte de este presupuesto de defensa, lo cual incluye la totalidad de las partidas destinadas a los servicios de información, es secreto. El nombre oficial de este “presupuesto negro” es “Programas de Acceso Especial” (SAP) y están clasificados como alto secreto. Los SAP se dividen en tres tipos básicos: investigación y obtención de armamentos (AQ-SAP), operaciones y apoyo (OS-SAP), e inteligencia (IN-SAP). Únicamente unos pocos congresis

continúa en la página siguiente

viene de la página anterior tas pueden asistir a las sesiones informativas sobre ellos[i]. Además, el Secretario de Defensa puede eximir a determinado programa del informe exigido, una decisión de la que sólo se notifica, oralmente, a un total de ocho congresistas pertenecientes a los comités de defensa. No existe un total oficial, aunque la Oficina General de Contabilidad (GAO) estimó en una ocasión que se dedicaban entre 30.000 y 35.000 millones de dólares al año a secretos militares y de inteligencia. Los fondos para “programas negros” incluidos en el presupuesto de 2004 fueron los más elevados desde 1998[ii].

Para añadir más oscurantismo sobre el complejo militar en Estados Unidos, el Departamento de Defensa pidió, en octubre de 2001, a las empresas estadounidenses fabricantes de armamentos, que no informaran sobre sus exportaciones. El secreto se extendía sobre los contratos ya firmados. Teniendo en cuenta la diversificación financiera inversora creciente con la Globalización, se hace muy complicado determinar hasta donde llegan los tentáculos del dinero proveniente de la producción de armamento. Lo que es indudable es que el negocio de las armas produce pingües beneficios en una sociedad global envuelta en pleno “choque de civilizaciones”. Existen sociedades financieras dedicadas a explotar este creciente mercado, ya sea blanqueando beneficios provenientes del tráfico de armas, como invirtiendo estos capitales en sectores económicos de importancia estratégica que refuercen este monopolio sobre el sector.

El grupo Carlyle es una de estas sociedades financieras y una de las más poderosas del momento. Las cifras indican que ninguna otra compañía de inversiones gestiona más dinero. Y es que el líquido con el que Carlyle cuenta para sus actividades es de casi 14.000 millones de dólares. Las inversiones del grupo Carlyle se extienden por todo el mundo. El desembarco en Europa de la sociedad fue espectacular. Llegó en el año 2001 con miles de millones de euros para invertir en los países más proclives a la política de Estados Unidos. Llama la atención su interés por sectores industriales estratégicos como el sector de los armamentos y la investigación. El Carlyle Group fue creado en 1987 y está dirigido por importantes figuras de la política internacional, ligados por la ideología conservadora: Frank C. Carlucci (ex-secretario de Defensa de Bush sr.), el



Fotografía desde arriba del pentágono

propio Bush sr. (ex-presidente de Estados Unidos), James Baker (ex-secretario de Estado con Bush sr.), John Major (ex-primero ministro de Reino Unido), John Malek (ex-director de la campaña electoral de Bush jr.), Sami Barma (director del Prime Commercial Bank), etc. La sociedad gestiona los bienes de algunas de las más importantes fortunas del planeta y actúa como contratista para numerosas empresas, especialmente las dedicadas a la fabricación de armamento[iii]. Posee participaciones mayoritarias en United Defense Industries Inc. (el principal suministrador de armas a los gobiernos de Estados Unidos, Turquía y Arabia Saudí), pero también posee participaciones en el sector civil que no tienen nada que ver con el militar, como por ejemplo en Seven Up (que asegura el embotellamiento para Cadbury Schweppes) o Federal Data Corporation (que equipó, por ejemplo, a la Federal Aviation Administration con su sistema de vigilancia de tráfico aéreo civil). Este tipo de empresas salió enormemente beneficiadas de las ayudas y de los importantes contratos que impulsó el gobierno Bush tras el 11-S. En concreto, el Carlyle Group se calcula que ha recibido del gobierno de Bush, a raíz del 11-S, más de 12.000 millones de dólares.

Aparte de dinero, Estados Unidos precisa movilizar importantes recursos humanos para mantener activo un ejército de tales dimensiones. Desde la Guerra de Vietnam, el servicio en las fuerzas armadas es voluntario y se ha convertido en una forma de movilidad social para quienes están vedados otros canales de ascenso. En 1999, el 38% del personal alistado en el ejército de Estados Unidos no pertene-

ecía a la raza blanca (el 22% eran afroamericanos, el 9% hispanos y el 7% otros). Esta proporción se incrementaba en las unidades de primera línea de combate. Incluso hay un factor racial en los criterios de selección para las distintas armas del ejército. La fuerza aérea es el feudo de la raza blanca, sólo un 28% pertenecen a minorías raciales, mientras que el 44% del personal del ejército de tierra pertenecen a minorías raciales. Los motivos prácticos, como el ascenso en el status social, son los principales a la hora de motivar el alistamiento en el ejército, pero no es despreciable el romanticismo que empuja a muchos jóvenes a buscar en la vida castrense el riesgo y la gloria. De hecho, en una sociedad en la que el ejército tiene un papel protagonista, como en Estados Unidos, es necesario reforzar esta visión idealista acerca del ejército y sus cometidos. En un ejército profesional como el de Estados Unidos, los soldados son inculcados con la idea de que constituyen un estrato especial de la sociedad. Por tanto, se sienten cada vez más inclinados a pensar en términos corporativos y no ya como personas que esperan regresar en breve a la vida civil. Todo esto constituye un aspecto del militarismo creciente que impregna la sociedad estadounidense.

Este militarismo se traduce en rasgos de violencia que impregnan la cultura. Las películas de Hollywood favorables a la guerra y que ensalzan la violencia no son una novedad. En Hollywood la desnudez del cuerpo humano no es bienvenida, mientras que la exhibición de armas y desgarros corporales varios se considera algo casi imprescindible. Las películas bélicas

continúa en la página siguiente

viene de la página anterior

en concreto, se realizan con asesoramiento, personal y equipamiento militares, a cambio de que las fuerzas armadas examinen por anticipado el guión y tengan derecho a efectuar cambios en el mismo. El Pentágono participa regularmente en la realización de películas que tratan temas bélicos. Estas películas han divulgado la imagen de que la guerra es emocionante, un lugar para demostrar la masculinidad y para desafiar a la muerte de un modo socialmente aceptable. El protagonista es un personaje prototípico familiarizado con el manejo de las armas e imbuido de una poderosa obsesión por salvar al mundo. El personaje del malvado está representado por una figura unidimensional, cuya única función es ser fanática y conspirar para llevar el dolor y la muerte a los norteamericanos. Actualmente, los villanos favoritos son terroristas, de origen musulmán, sudamericano o del Este. Esa es la tesis de tantas películas recientes de Hollywood como: *Iron Eagle* (Aguilas de acero), *True lies* (Mentiras arriesgadas) y *The Siege* (Estado de sitio), que tienen al “terrorismo islamista” de argumento reiterativo y gancho del que colgar una película de acción y emoción. Su “gente”, el colectivo de personas corrientes del que proviene el terrorista, se representa como si también compartiera las mismas características de los que cometen los actos terroristas.

Hasta finales de la década de 1960, las películas de guerra estadounidenses siempre terminaban en victoria. Esas victorias de ficción reforzaron la imagen de que las fuerzas armadas podían conquistarlo todo, eran todopoderosas y siempre tenían razón. Evidentemente, después de la Guerra de Vietnam se produjeron algunos cambios. Se introdujo cierto realismo, aunque el Pentágono se negó a colaborar en algunas películas como *Apocalypse Now*. En la actualidad, se ha recuperado el estilo triunfalista, aunque con frecuencia aparece un factor nuevo con respecto a las viejas películas y es el personaje de un traidor relacionado con Estados Unidos. El traidor desprecia los valores más profundos y conservadores de América y representa la antítesis del héroe. Hoy en día, cada rama de las fuerzas armadas posee un despacho en Los Angeles que se encarga de negociar las producciones fílmicas. Estas oficinas están gestionadas por los “oficiales de proyecto” que el Pentágono envía a los rodajes de las películas, con las que han firmado un con-

trato, observan lo que se está filmando y ofrecen su asesoramiento y punto de vista. Un ejemplo contemporáneo de los estrechos vínculos entre Hollywood y el Pentágono es *Pearl Harbor*, de los estudios Disney. La película se estrenó el 21 de mayo de 2001, con una proyección especial en la cubierta de aterrizaje del portaaviones nuclear *John C. Stennis*. Se montaron unas gradas y se instaló una inmensa pantalla sobre la cubierta. A continuación, el portaaviones se trasladó (sin aviones) de su puerto base en San Diego a Pearl Harbor específicamente para el acto. La marina y Disney invitaron al estreno a más de 2.500 personas. Tal como muestran los créditos, gran número de mandos de las fuerzas armadas ayudaron a realizar la película; a cambio pudieron realizar modificaciones en el planteamiento de la trama con el fin de presentar a los militares bajo una óptica favorable y promover la idea de que el servicio militar es romántico, patriótico y divertido. Según el *Chicago Tribune*, los reclutadores militares llegaron a colocar mesas en los vestíbulos de los cines donde se proyectaba la película, con la esperanza de atrapar a unos cuantos jóvenes a la salida de la película[iv].

El ejército actúa como una corporación más, promocionando sus productos (la guerra) y lanzando sus ofertas de reclutamiento al mercado. Para conseguir este objetivo de forma más eficiente, firma periódicamente contratos con empresas de la comunicación para difundir su mensaje[v]. La imagen del ejército debe ser impoluta y de infalibilidad para que refuerce el mito de la supremacía militar estadounidense. Los desastres y los casos de negligencia son tratados por los medios de comunicación con gran benevolencia. Como cuando el 9 de febrero de 2001, el submarino nuclear de ataque *Greeneville* de 6.500 toneladas salió repentinamente a la superficie frente a la costa de Honolulu durante una emergencia simulada. Colisionó con el *Ehime Maru*, un buque escuela japonés de 130 metros de eslora, lo hundió y ocasionó la muerte a nueve jóvenes japoneses. El caso fue un claro ejemplo de negligencia de la marina. El submarino había zarpado con el único fin de dar un paseo a dieciséis ricos patrocinadores de la marina. Sin embargo, el tratamiento que dio la prensa al suceso fue el de un accidente inevitable. Por otro lado, la influencia de la industria del armamento sobre la difusión de la información y la cultura, a través de la inversión financiera

en empresas de comunicaciones, no es nada despreciable. Por ejemplo, el principal accionista de la cadena NBC es la corporación *General Electric*, una de las principales empresas proveedoras del Departamento de Defensa. Los contratos de GE para motores de aviones militares ascienden a miles de millones de dólares. Este fenómeno no se da únicamente en Estados Unidos, sino también en todos los países con una potente industria de armamentos. En el caso de Francia, por ejemplo, *Serge Dassault* y *Jean-Luc Lagardère*, dos de los dos principales empresarios de la comunicación en el país, afines al presidente *Jacques Chirac*, tanto por simpatía ideológica como por asuntos de negocios, dirigen respectivamente los grupos *Dassault* y *Lagardère*. Estos dos importantes grupos tienen en común la inquietante particularidad de haberse constituido en torno a una empresa central dedicada a la actividad militar (aviones de caza, helicópteros, misiles, cohetes, satélites, etc.). El viejo temor se ha hecho realidad: algunos de los principales medios de comunicación están ya en manos de los vendedores de cañones. En este momento en el que se producen importantes tensiones internacionales, es de imaginar que estos medios de comunicación no se opondrán enérgicamente al empleo de intervenciones militares.

Aleksandro Palomo Garrido
(Doctorando en el departamento de
Ciencia Política y de la Administración II
en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología de la UCM).

[i] Este limitado acceso a la información sólo se concedió bastante avanzada la Guerra Fría, tras los escándalos del Watergate.

[ii] Datos extraídos de: Chalmers Johnson. *Las amenazas del imperio*. Edt. Crítica, Barcelona, 2004. p. 135.

[iii] Los haberes financieros del saudí *Bin Laden Group* (SBG) son gestionados por el *Carlyle Group*, desde el año 1995 en que *Khaled Bin Mahfouz* confió millones de dólares a la empresa.

[iv] Ver: Johnson, 2004, p. 129.

[v] Por ejemplo, ha firmado recientemente un contrato por valor de 470 millones de dólares con *Microsoft*, que es copropietaria de *MSNBC* junto con *NBC*.

Manifestación en Madrid por una vivienda digna

Las ciudadanas y los ciudadanos se dieron cita para proclamar con fuerza, vigor y convicciones profundas que la vivienda es un derecho y no un negocio

La convocatoria era en la Puerta del Sol de Madrid, centro y archivo de tantos acontecimientos e hitos de las luchas ciudadanas españolas contra tantas y tan variadas tiranías desde los mamelucos de 1808 hasta la desgatada Restauración que dio paso a la recordada República del 14 de abril.

Esa plaza símbolo del Madrid del unamuniano Rompeolas de las Españas, vivió en la tarde el sábado 24 de marzo de 2006 otro más de sus hermosos momentos cuando las ciudadanas y los ciudadanos se dieron cita para proclamar con fuerza, vigor y convicciones profundas que LA VIVIENDA ES UN DERECHO Y NO UN NEGOCIO que si habla tanto de la Constitución el DERECHO que ella contempla explícitamente es un deber para las Instituciones públicas y debe ser tan exigible como ya lo son los derechos a la educación y a la salud.

Allí estuvieron aquellos y aquellas que sufren en sus proyectos de vida la falta de un techo habiendo solamente en Madrid más de 300.000 pisos vacíos guardados para la avaricia especuladora.

Allí estuvimos todos cuantos sentimos la inquietud por lo público que lo quieren desprestigiar y después anular, allí estuvimos las ciudadanas y los ciudadanos que desde ATTACMADRID queremos contribuir en la medida de nuestras fuerzas a crear cultura de participación y de construcción de sociedades más justas y vivibles, pues sin techo digno para todas y todos no hay horizonte creativo ni convivencia realmente humana

Estuvimos allí también para alertar de



los riesgos que sin duda entraña la próxima Reunión en nuestra ciudad, los próximos días 29 y 30 de este mes de marzo, del GUPO DE CIUDADES GLOBALES de la OCDE, grupo de expertos económicos internacionales que discutirán las grandes perspectivas del negocio urbano para los grandes inversores multinacionales

Desde ATTACMADRID, NOSOTROS LOS EUROPEOS, como titula su último libro SUSAN GEORGE, vemos con preocupación los tristes fastos conmemorativos del 50 cumpleaños de la Unión Europea cada vez más liberal y ultra económica, cada vez menos cultural, menos

ecológica de verdad y, en definitiva menos humanista y menos enraizada en los pueblos

Como esta Europa es cada vez MENOS CASA, por eso fuimos los de Attac el día 24 de marzo a la PUERTA DEL SOL, a mostrar nuestra propuesta y también nuestra ilusión de que LA VIVIENDA ES UN DERECHO, CUANDO SE VAYA HACIENDO REALIDAD ESE MUNDO DISTINTO QUE SI LO QUEREMOS TODOS SERÁ POSIBLE, pero como bien dicen los jóvenes HAY QUE CURRÁRSELO DURO.

José Ramón Montes. Observatorio de Vivienda, Suelo y Urbanismo de Attac

Attac protesta durante la lectura del Quijote en el Círculo de Bellas Artes

Jóvenes del Grupo de Activismo Social (GAS) de Attac se manifiestan contra la aprobación del Proyecto de Ley de la lectura, el libro y las bibliotecas, en el que se establece un "canon bibliotecario"

viene de la primera página

Sobre las siete de la tarde, un grupo de jóvenes del Grupo Activismo Social (GAS) perteneciente a ATTAC, se alzó en el Salón de Actos del Círculo de Bellas Artes, donde se celebraba la VIII edición de la lectura continuada de El Quijote, con carteles en los que se leía "No al préstamo de pago". Ante la asombrada mirada del centenar de asistentes al acto, dos de los presentes leyeron un manifiesto tras la intervención del Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no sin antes disculparse por la interrupción de un acto que fomenta la lectura, pero que se contradice con la política del Gobierno. Muchos de los presentes cobijaron con sus aplausos a los activistas, y contribuyeron con sus firmas a que se revoque el Dictamen sobre el Proyecto de Ley de la lectura, el libro y las bibliotecas.

Tras la lectura del manifiesto, todos los jóvenes abandonaron el salón y, una vez en el hall, corearon "No a la privatización de la cultura". La Ministra de Cultura, Carmen Calvo, se aventuró a adentrarse en un debate, ante las cámaras, con uno de los jóvenes. La conversación finalizó cuando uno de sus guardaespaldas de la funcionaria empujó al joven.

El Manifiesto del GAS:

"Disculpen, damas y caballeros, pero interrumpimos este acto tan significativo del día Internacional del Libro para hacer un llamamiento a la ciudadanía y reivindicar los derechos del lector.

En nombre de los mal llamados derechos de propiedad intelectual se está llevando a cabo el mayor ataque a nuestros derechos como ciudadanos, de acceder a la lectura y a la cultura.

La implantación del préstamo de pago en bibliotecas supone considerar a las bibliotecas como entidades comerciales y no como instituciones culturales necesarias para el desarrollo de los ciudadanos y el ejercicio del derecho a



Zapatero lee el Quijote

la educación, la información y la lectura que reconoce la Constitución Española.

Prestar un libro no es un ataque contra los derechos de autor, sino un acto para preservar la herencia cultural de una sociedad. Se trata de un fondo donde la cultura de una civilización descansa a salvo de las fuerzas del mercado. Acto honroso del cual muchos autores y lectores se enorgullecen y que ha sido manifestado por diversas entidades y personalidades en toda Europa.

Pretender cobrar cada vez que se preste un libro es un acto de piratería, además de un ataque a nuestra cultura. Las bibliotecas, todas las bibliotecas, son los únicos lugares donde los libros existen de verdad, viven de verdad. Conservémoslas, por favor".

El Dictamen sobre el Proyecto de Ley de la lectura, el libro y las bibliotecas, aprobada por el Congreso, establece el precio fijo de los libros, a excepción de los manuales escolares, e incluye el establecimiento de un canon por el préstamo bibliotecario de 0,20 euros por libro, que asumirán las Administraciones en cumplimiento con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este canon revierte, por tanto, en menores fondos para las bibliotecas.

María José Martínez, Prensa Attac Madrid

Susan George, Doctora Honoris causa por la UNED

viene de la primera página

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) invistió ayer con el Honoris Causa a dos destacados analistas de política internacional y de los procesos de globalización económica y cultural, la estadounidense Susan George y alemán Ulrich Beck.

George se ha convertido en una de las voces de referencia del altermundismo, el movimiento que propone alternativas a una globalización sustentada en lo económico y que privilegia la libertad de capitales mientras restringe la de seres humanos. Ha expuesto buena parte de sus teorías sobre ello en el libro El informe Lugano. Aprovechó su paso por Madrid para participar en dos foros de debate organizados por Attac España, la organización por una fiscalidad justa de la que es vicepresidenta a nivel internacional, bajo el lema "¿Es posible una Europa democrática y social sin Justicia Fiscal Global?", y el otro por Los movimientos sociales en Europa.

En el primero de ellos, celebrado en la escuela Julián Besteiro de Madrid, volvió a insistir en la importancia de una fiscalidad justa para erradicar las desigualdades sociales a nivel mundial, por ejemplo gravando los flujos internacionales de capital. Además, advirtió de que la evasión de impuestos de los más ricos hacia paraísos fiscales acaba por pasar factura al resto de la población, que debe pagar más si quiere obtener el mismo nivel asistencial que estaba obteniendo.

Esperanza medioambiental en Europa

George también hizo referencia a otro problema de escala global como el cambio climático, señalando que solo Europa puede impulsar medidas concretas para luchar contra él porque en EEUU el Gobierno, no solo no hace nada sino que incluso veta a sus propios científicos cuando advierten de la realidad del calentamiento

En el conflicto generado por el intento de cerrar las instalaciones en Puerto Real de Delphi Automotive Systems España (DASE) y trasladar su producción y cartera de clientes a Polonia, se libran tres batallas que, a su vez, son tres oportunidades de empleo, desarrollo industrial de la Bahía de Cádiz y construcción de otra Europa.

La primera es el propio pulso entre la decisión de la empresa de cerrar, de un lado, y los trabajadores, Administraciones Públicas y el conjunto de la población de la Bahía por mantener la actividad y el empleo, por otro. Como nos informaba recientemente Juan José Téllez en La Voz, al día de hoy, existe una oferta por parte de tres empresas, Appaloosa Management LP, Cerberus Capital Management LP y Harbinger Capital Partners Master Fund I. Esta negociación va muy lenta por los propios intereses de DASE, ya que el proceso de deslocalización implica de por sí el cierre de la actividad. Si esta se mantiene se quedaría con la cartera de clientes o parte de ella, lo que haría inviable o dificultaría la viabilidad de la nueva factoría.

La propia existencia de esta oferta nos indica el punto fuerte del que parten los trabajadores. Su "saber hacer", la calidad reconocida de su producción, implicación de los trabajadores y gestión de los procesos por parte de los clientes que hacen rentable mantener su producción aquí. De no ser así no existiría la oferta de compra. El mantenimiento de la actividad de Delphi puede lograrse a través de este inversor u otro que pudiera aparecer, o bien, por la asunción por parte de los propios trabajadores o parte de ellos de la titularidad de la empresa con los apoyos financieros necesarios. En ambos casos se abre la posibilidad de mantener y ampliar los empleos, ya que conllevaría la salida de la transnacional y de su cadena de dependencias. Aunque la pertenencia se perciba como "tranquilidad y seguridad" esta no deja de ser una falsa seguridad como demuestra el actual conflicto. La verdadera seguridad está en tener la capacidad de decisión aquí y controlada. La salida del entramado transnacional abre la posibilidad de desarrollar y complementar la actual actividad con otros procesos, con otros desarrollos tecnológicos, con otros mercados y clientes más cercanos a nuestras propias necesidades y demandas.

La segunda batalla, liderada desde la

Tres batallas y oportunidades en Delphi

Fernando Moreno Bernal

propia Junta de Andalucía, es la de implicar al Gobierno Central y a la Comisión Europea en la financiación de la reindustrialización de la Bahía de Cádiz con un Plan específico, que entre otras cosas potencie un rápido desarrollo del Parque Tecnológico de Las Aletas. Podríamos considerarlo como Plan B en el conflicto de Delphi. Si no se materializa la venta de los activos que permita mantener la producción y el empleo una rápida industrialización de Las Aletas con empresas de futuro abre la puerta a la recolocación prioritaria de los trabajadores/as de Delphi. Aunque se mantenga la actividad es necesario luchar por este objetivo, que tiene su propia ambición al margen del conflicto de Delphi, pero que además complementa en este supuesto el futuro y la estabilidad industrial al abrir la puerta a otros mercados y sinergias con las empresas que allí se instalen. En esta segunda batalla hay que inscribir la convocatoria de la huelga general del próximo día 18 de Abril. DASE no sufre el más mínimo daño por la huelga ni en la factoría que quiere cerrar ni mucho menos por la general. Pero esta Huelga General debe ser apoyada mayoritariamente porque en ella nos jugamos gran parte de los posibles Fondos Europeos para financiar el futuro industrial de la Bahía de Cádiz.

En esta segunda batalla el único peligro que hay que conjurar es que alguien desde su tranquilo despacho de Sevilla se olvide que es la opción B. Ganar el pulso a DASE pasa ante todo por la unidad, determinación y confianza en si mismo de los propios trabajadores de la factoría de Puerto Real. Cualquier decisión que ponga en cuestión esta unidad supone debilitar, si no impedir, las posibilidades de éxito de la que es la prioridad: Delphi no se cierra. La batalla es contra un gigante, pero no es la primera vez que David vence a Goliat, y como dijo Antonio Pina, Presidente del Comité de Empresa, la única batalla verdaderamente perdida es la que no se da. Hay que confiar en la fuerza y determinación de los trabajadores, que nadie tire la toalla por ellos antes de tiempo.

La tercera batalla es la europea. El conflicto de Delphi es el de la deslocalización en el seno de la propia Unión Europea. Los gobiernos regionales y nacionales no disponen de instrumentos para enfrentarse a las decisiones de las transnacionales. No se trata de impedir la movilidad del capital en el seno de la UE, ya que el éxito económico de esta ha sido impulsado en gran medida por estos mismos en las distintas ampliaciones. De lo que se trata es de reglamentar y equilibrar esta movilidad en el seno de la UE, evitar la impunidad y desvergüenza en la actuación de estas como demuestran los casos de Boliden y Delphi. Aprovechar el debate europeo abierto hasta 2009 para plante

continúa en la página siguiente



Artículo de Nicolás Angulo Sánchez, Attac Madrid

COMERCIO Y DESARROLLO

Un aspecto muy a tener en cuenta, desde el punto de vista de los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo, ante una globalización que se reduce casi exclusivamente a la mundialización de la economía de mercado consiste en que una de las principales causas del subdesarrollo reside en un comercio desorbitadamente injusto y desequilibrado entre los países desarrollados y los países en desarrollo.

Los liberales de mercado dicen pretender reforzar la “competitividad” de los agentes intervinientes en el mercado sin tener en cuenta que se trata de una competitividad entre sujetos en condiciones muy desiguales, con lo cual se puede prever fácilmente de antemano quién tiene casi todas las probabilidades de ser el ganador en tamaña “competición” 2.

El hecho de que no se haya conseguido instaurar el nuevo orden económico internacional, tal y como reivindicaban los países en desarrollo recién descolonizados en los años sesenta y setenta del pasado siglo, confirma su visión de que el actual sistema comercial como una manera de perpetuar su dependencia y pobreza respecto de las antiguas potencias coloniales. Aquella reivindicación de un orden económico internacional más proclive a los intereses de los países y pueblos más pobres se encuentra hoy en día más justificada que nunca. Mientras tanto, hay que conformarse con algunos mecanismos como los sistemas de preferencias generalizadas para determinados productos procedentes de países en desarrollo o los acuerdos sobre productos básicos. La Política de Cooperación al Desarrollo de la Unión Europea, en especial los Acuerdos de Cooperación con los Países ACP (África, Caribe y Pacífico), el último de los cuales es el Acuerdo de Cotonú 3, merece ser mencionada a este respecto con objeto de evaluar su idoneidad y su suficiencia o insuficiencia.

Dado que la Unión Europea, al igual que el resto de los países más desarrollados, apuesta firmemente por conformar sus relaciones comerciales a las normas impuestas por la

Organización Mundial del Comercio, incluidas sus relaciones con los países más subdesarrollados, debería exigir de esta organización, al menos, que tenga mucho más en cuenta los intereses y la situación de desventaja en que se encuen-

tran los países subdesarrollados a la hora de competir en un mercado tan desigual y desequilibrado como el que rige las relaciones económicas y comerciales en la actualidad y que, precisamente por las enormes desigualdades entre los distintos contendientes, el mercado por sí solo no solamente no logra corregir esas desigualdades y desequilibrios sino que los acentúa y agranda cada vez más.

En todo momento, deben tener presente estas organizaciones que el comercio y el desarrollo son actividades que deben compatibilizarse, sobre la base de la equidad, teniendo en cuenta que el comercio es un instrumento y el desarrollo y los derechos humanos el fin, y no al revés. Es el comercio el que debe subordinarse a los individuos y a los grupos humanos: los seres humanos e incluso muchos recursos naturales no son reductibles a mera mercancía vendible en el mercado mediante un precio. Además, los beneficios de la actividad comercial deberían ser equitativamente repartidos entre todos los individuos y grupos humanos, atendiendo especialmente a las necesidades de los individuos y grupos más vulnerables.

Ejemplos de un modo diferente de comerciar al actualmente predominante lo muestran la interesante labor efectuada por redes de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGDs) consistente en la creación de redes comerciales alternativas para suministrar productos a las denominadas tiendas de comercio justo o comercio solidario, es decir, tiendas donde se venden y distribu-

yen productos procedentes de los países en desarrollo que respeten ciertas exigencias medioambientales y laborales. El principal propósito de estas tiendas consiste en negar que el comercio deba basarse exclusivamente en obtener la máxima rentabilidad al mínimo coste por encima de los valores humanos y de unas condiciones dignas de trabajo con salarios justos. Asimismo, se pretende establecer unas estructuras comerciales al servicio de las necesidades reales de la sociedad y de sus individuos y no de un consumismo irracional e irresponsable, inducido por una publicidad tan superficial como engañosa, el cual facilita el exceso y el despilfarro.

Las condiciones que exigen estas tiendas de comercio justo giran, por ejemplo, en torno a requisitos como la sostenibilidad medioambiental de su producción y al respeto de los derechos laborales y fundamentales de los trabajadores. Este comercio alternativo posee sobre todo un valor simbólico y pedagógico para los ciudadanos de los países desarrollados con objeto de que adquieran conciencia de que en ocasiones detrás de un producto o marca promovida con un gran aparato de publicidad por una empresa transnacional se esconden actividades productivas altamente contaminantes, condiciones de trabajo insalubres o sobreexplotación laboral, incluidos niños, con la consiguiente negación de derechos fundamentales y jornadas de trabajo excesivamente prolongadas con unos salarios muy reducidos.

continúa en la página siguiente

viene de la página anterior
ar propuestas de regulación de esta movilidad en el seno de UE para su incorporación en los próximos Tratados. Avanzar en reglas de comportamiento, restricciones éticas efectivamente traducidas a un derecho exigible en el seno de UE

para, posteriormente, luchar por su implantación internacional.

ATTAC, justicia económica global, se presentó en Cádiz el pasado 28 de Marzo y acordó constituir una comisión de apoyo a los trabajadores/as de DELPHI. Se propone constituir un gabinete externo de análisis y

propuesta de alternativas y gestión del conflicto que incluya experiencia sindical con el mundo académico, al que ha invitado a integrarse vía Internet a miembros del Consejo Económico y Social Europeo, universidad de Málaga y Madrid, además de la universidad de Cádiz.

viene de la página anterior

En este sentido, en ocasiones estas redes de ONGDs han llegado incluso a organizar campañas de denuncia y boicót contra algunas de estas empresas. Así, por ejemplo, pueden citarse como pioneras las campañas contra las empresas que comerciaban con la Sudáfrica del "apartheid" o la llevada a cabo en los años ochenta del siglo pasado contra la firma Nestlé por pretender comerciar una fórmula de leche para bebés en sustitución de la leche materna.

Estos principios deberían ser tenidos más en cuenta a la hora de poner en práctica medioambientales con el objetivo principal declarado de combatir la pobreza.

Iniciativas más recientes como las del NEPAD 4, siglas que corresponden en inglés a la Nueva Alianza para el Desarrollo en África, donde se destaca la noción de asociación o "partenariado" (partenariat, en francés, partnership, en inglés) que en castellano vendría a expresar la idea de acuerdo comercial entre pares o iguales, con objeto de combatir la disparidad y consiguiente subordinación y dependencia que inevitablemente se produce entre socios comerciales cuyo potencial económico es muy desigual. Dicho término es, asimismo, muy recurrido en el ya mencionado Acuerdo de Cotonú entre la Unión Europea y los países ACP.

Una fuente importante de financiación de las actividades en favor de los derechos humanos y del derecho al desarrollo, que no conviene olvidar, se refiere a los presupuestos de las Naciones Unidas, principalmente de sus órganos y de sus organismos especializados en asuntos relativos a los derechos humanos, para lo cual debe asegurarse su debida y puntual financiación, cesando el bloqueo financiero a que están sometidos desde hace algún tiempo con periodicidad variable por parte de algunos países desarrollados. En efecto, o, al situación financiera de las Naciones Unidas viene siendo precaria en los últimos años, sobre todo debido a que muchos Estados miembros, algunos de ellos tan destacados como los EE.UU., persisten en no pagar total y puntualmente sus cuotas. Así, por ejemplo, en diciembre de 1997 de los 187 Estados miembros sólo 100 estaban al corriente de sus cuotas.

En particular, debe mencionarse la importante labor del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien debe presentar anualmente un informe en relación con la aplicación del derecho al desarrollo, así como de su Oficina, la cual se encarga, entre otras tareas, de la coordinación de las actividades de los distintos organismos del sistema de las Naciones Unidas en pro de los derechos humanos, ni cluido el derecho al desarrollo. Sin embargo, actual-

"Debe insistirse en la necesidad de estrechar más la colaboración entre los organismos del sistema de las Naciones Unidas y las instituciones internacionales de carácter económico, financiero o comercial"

mente, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dispone de un presupuesto anual muy limitado respecto del conjunto del presupuesto anual de las Naciones Unidas, apenas un 1,7% del total, aunque se financie también de generosas aportaciones voluntarias por parte de los gobiernos a iniciativas y programas específicos como, por ejemplo, los dedicados a los pueblos indígenas, a los derechos del niño, a las víctimas de torturas y esclavitud, entre otros.

Por todas estas razones, debe insistirse en la necesidad de estrechar más la colaboración entre los organismos del sistema de las Naciones Unidas y las instituciones internacionales de carácter económico, financiero o comercial, el Fondo

"Los seres humanos y la naturaleza no deben ser comercializables"

Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, principalmente, con el propósito de que estas últimas tengan mucho más en cuenta los intereses y las necesidades de los países menos desarrollados y de los sectores más vulnerables y desprotegidos de la sociedad, subordinando su actividad a las normas y principios del derecho internacional relativos a los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo humano y sostenible, y, por lo tanto, a las instituciones de las Naciones Unidas competentes en estas materias. A este respecto, debe mencionarse, en particular, el denominado Órgano para la Resolución de Diferencias de la OMC, sin duda el tribu-

nal de dicha institución aunque no se denomine como tal, pues sus "resoluciones" son tan efectivas como carentes de legitimidad, en su mayoría

Las medidas a tomar y aplicar para superar los numerosos obstáculos al desarrollo en la actualidad deberían orientarse en un sentido muy diferente al propuesto por los citados "programas de ajuste estructural", para lo cual resultan útiles las propuestas efectuadas por los sucesivos grupos de expertos sobre el derecho al

desarrollo designados en el marco del sistema de las Naciones Unidas, así como las formuladas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en sus informes anuales sobre desarrollo humano,

sin olvidar las estrategias diseñadas en las sucesivas proclamaciones de decenios para el desarrollo desde los años sesenta del pasado siglo. En este sentido, a modo de ejemplo, se pueden señalar el siguiente tipo de propuestas:

- Deben aplicarse, principalmente por parte de los países más desarrollados, políticas económicas racionales que no favorezcan los movimientos de capital especulativo e incontrolado, labor en la que deberían empeñarse las instituciones financieras internacionales como el FMI, el BM, junto con la OMC, estrechando su colaboración con el sistema de las Naciones Unidas y aportando sus cuantiosos fondos para establecer un entorno económico internacional dinámico y propicio que incluya un sistema comercial multilateral abierto, basado en normas, equitativo, seguro, no discriminatorio, transparente y previsible, así como la promoción de la inversión y la transferencia de tecnología y conocimientos.

- Asimismo, según el Programa de Desarrollo adoptado mediante resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1997, deben adoptarse medidas encaminadas a promocionar un nivel adecuado de ahorro, mediante políticas fiscales y monetarias apropiadas y sistemas tributarios eficaces y justos, así como una asignación de recursos presupuestarios que no vaya en detrimento del gasto público en favor de los derechos sociales de los sectores más vulnerables y desfavorecidos

continúa en la página siguiente

DECLARACIÓN DE LISBOA

Documento a favor de una Europa democrática redactado con motivo de la reunión en Lisboa de la EPA (Asamblea Preparatoria Europea) del Foro Social Europeo

El Foro Social Europeo (FSE) se ha convertido en el mayor espacio trans-europeo de acogida para las alternativas democráticas, sociales, feministas y ecologistas. El debate sobre el déficit democrático de las instituciones europeas y la elaboración de las propuestas europeas y de las campañas del movimiento social y la sociedad civil ha ido ganando cada vez más importancia en el proceso del FSE.

Nosotros, participantes de la Asamblea Preparatoria Europea (EPA) del FSE en Lisboa denunciamos la "Declaración de Berlín" de los Gobiernos de los Estados miembros de la UE, cuyo objeto es imponernos un nuevo Tratado europeo sin debate público y sin decisión democrática del pueblo.

Este método, que excluye a los pueblos de su derecho a decidir con respecto a su futuro y al futuro de la Unión, preten-

de continuar con el objetivo de una Unión Europea neoliberal, militar y antidemocrática. Este modelo de Europa ya fue rechazado en los referéndum de Francia y Países Bajos tras un amplio debate público.

Nosotros, participantes de la EPA, exigimos que los ciudadanos de Europa puedan decidir su futuro a través de un debate realmente democrático, cuyo resultado se confirme por referéndum. Rechazamos la "Declaración de Berlín" y llamamos a una movilización transeuropea en favor de una Europa democrática, la Europa de los derechos sociales para una vida sostenible, una Europa pacífica en solidaridad con todo los pueblos del mundo, una Europa que de una respuesta firme a la crisis ecológica global.

Lisboa, 31 de marzo de 2007

Este documento ha sido firmado por un centenar de representantes de organizaciones y de asistentes a la reunión de la EPA de Lisboa, entre las que cabe citar a:

Attac Alemania, Attac Francia, Attac Austria, Attac Dinamarca, Attac Noruega, Attac Suecia

Action for Justice and Peace – AJPAZ; Caritas, Francia; ARCI, Italia; CGIL, Italia; Union Syndicale Solidaires, Francia; FSU, Francia; GAIA, Grupo de Accao e Intervencao Ambiental, Portugal; Gsee, Grecia; Espaces Marx, Francia; Fondation Copernic, Francia; Euromarchés International: Freedom Woman Foundation Kurdish Women; PeaceefficeTransform, Italia, Cidac, Portugal; Liga para Protecao da Natureza, Portugal; No Vox, Francia; ARCI, Italia; y Sinistra Critica, Italia SDL, Italia y otros

viene de la página anterior y sí en pos de una reducción de los gastos militares y el comercio y adquisición de armas.

- Por último, otra propuesta útil consiste en la consolidación y el fortalecimiento de la labor y de los mecanismos establecidos en las diferentes conferencias y cumbres mundiales sobre cuestiones relativas a los derechos humanos para el control y seguimiento del cumplimiento y de la aplicación de los compromisos contraídos por parte de los Estados participantes.

Así pues, debe insistirse en la necesidad una mayor voluntad política por parte de los Estados, principales sujetos del derecho internacional, y sobre todo de los Estados de los países más desarrollados, para seguir adelante, convirtiendo estos compromisos en normas jurídicas y superando los muchos obstáculos que encuentran los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo, para hacerse realidad en un mundo tan mercantilizado como el que vivimos.

Asimismo, se ha destacado la cada vez mayor responsabilidad del sector privado mercantil, en especial de las empresas

transnacionales y de los grandes bancos privados, como sujetos obligados por el conjunto de los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo, debido al gran poder económico que acaparan, a la gran presión que ejercen sobre el poder político y a la gran cantidad de recursos humanos y de conocimiento de que disponen. Si bien es legítimo pretender obtener el máximo de beneficios y de rentabilidad en sus actividades, éstos no deben lograrse a cualquier precio cuando se trata de dar trabajo a personas humanas y de utilizar unos recursos naturales que son limitados.

También debemos señalar que la voluntad política para poner en práctica el derecho al desarrollo humano y sostenible no debe surgir solamente de los gobernantes, de los funcionarios estatales o del mundo empresarial y bancario sino que debe surgir sobre todo de la concienciación y movilización ciudadana a nivel mundial y de todo tipo de instituciones, como las instituciones educativas y los medios de comunicación de masas. En definitiva, la movilización de la comunidad internacional en su conjunto. Ésta es la mejor garantía para que, una vez reconocidos plenamente a nivel jurídico formal los derechos humanos incluido el

derecho al desarrollo tanto a nivel nacional como internacional, tengan éxito los esfuerzos, las políticas y las estrategias diseñadas para aplicar y hacer realidad todos los derechos humanos para todos de manera equitativa, es decir, en condiciones de igualdad y libertad.

Los seres humanos y la naturaleza no deben ser comercializables

La persona humana y los grupos donde convive y desarrolla su personalidad no deben considerarse como meras mercancías o como meros agentes, más o menos solventes, de la oferta y la demanda del mercado global. Tampoco deben convertirse en meros consumidores ni meros deudores de préstamos contraídos en circunstancias de desigualdad e indefensión manifiestas que, a toda costa, deben reembolsar. Asimismo, nuestro entorno natural o medioambiental no debe reducirse a una mera fuente de materias primas cuyo coste debe reducirse al mínimo para hacer más rentable la fabricación de un determinado producto. La manifiesta insuficiencia del modelo monetarista, mercantilista y consumista característico del actual proceso de mundialización o globalización del mercado se pone así en evidencia.

Documentos Attac**Comunicado de Attac España sobre inversión de Fondos de Pensiones en renta variable**

El Gobierno ha llegado a un acuerdo con los agentes sociales (sindicatos CCOO y UGT y CEOE, Cepyme) sobre el texto de anteproyecto de Ley que modificará la Ley Reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Según este acuerdo, el Gobierno está estudiando la posibilidad de lanzar al mercado y entregar parte del dinero del Fondo de Reserva de las pensiones a gestores privados para diversificar sus inversiones, con el fin de mejorar su "rentabilidad".

Attac España quiere expresar su desacuerdo con el anteproyecto de Ley y alertar a la opinión pública sobre las consecuencias previsibles del mismo. Por ello manifestamos:

- **Que la determinación de invertir** en operaciones de renta variable (es decir, especulativas) hasta el 30% del patrimonio total del Fondo de reserva de Pensiones, es una decisión muy grave que conlleva un riesgo económico cierto para los intereses ciudadanos y que consideramos completamente inasumible.

- **Por otro lado, Attac se manifiesta** abiertamente en contra de que la administración de esta cartera de inversiones públicas se quiera hacer externa y se ponga en manos de gestoras privadas, es decir de bancos y de compañías aseguradoras. Ello significaría un paso más hacia una privatización de hecho de fondos públicos de los españoles y al reforzamiento de la gran banca, otorgándole una capacidad de maniobra, tanto económica como política, de difícil control, a pesar de las medidas cautelares que se quieren proponer. Hemos visto recientemente que estas medidas siempre son difíciles de aplicar cuando se trata de defender los intereses ciudadanos.

- **Esta nueva cesión al sector privado** de parcelas de la administración pública, significaría igualmente que esos fondos públicos van a servir para lucrar a los gestores de las futuras comisiones derivadas del manejo de los dineros del Fondo y que van a suponer centenares de millones de Euros anuales para sociedades, asesores y comisionistas beneficiarios de esta concesión.

En definitiva, son una vez más los criterios de la rentabilidad bursátil y del mercado los que, a juicio del Gobierno y de nuestros agentes sociales, se quiere primar a la hora de gestionar el futuro de la "hucha" de las pensiones. Una hucha de más de 40.000 millones de euros - el 4,1% del PIB español - que hemos ido llenando todos los españoles y cuya gestión, distribución de excedentes y control de los mismos se escapa cada vez más a la voluntad y decisiones de los ciudadanos. Mientras tanto en nuestro país persisten unos niveles medios de pensión indignos e indefendibles y unos desequilibrios y déficits inaceptables en materia social y de distribución de los recursos económicos.

Si el Gobierno persiste en aprobar unilateralmente este proyecto Attac promoverá una movilización ciudadana. Un cambio de esta envergadura en la utiliza-

ción financiera de los fondos del sistema de pensiones requeriría en todo caso un amplio debate en la sociedad, preguntándose a los ciudadanos españoles qué destino quieren dar a esas importantes sumas de dinero

Nuestra propuesta alternativa para garantizar el futuro de las pensiones es que el gobierno corrija las políticas fiscales que viene realizando y que implemente medidas necesarias para incrementar el erario público. En este sentido debería dejar de rebajar los impuestos sobre los beneficios de las grandes empresas y compañías transnacionales, las cuales multiplican sus beneficios año tras año. También debería aumentar los impuestos sobre los beneficios del capital financiero, así como los recursos de la administración tributaria para combatir la evasión y el fraude fiscal, medidas que asegurarían un incremento muy significativo del erario público.

Que las pensiones estén garantizadas y no peligren, sólo depende de la voluntad política de los gobiernos para implementar sistemas fiscales más justos. En ese sentido si llegara a darse una situación de déficit en los fondos de pensiones públicos, este habría de ser cubierto con partidas de los presupuestos generales del Estado. Unas pensiones dignas son un derecho de los trabajadores, más allá del sistema de satisfacción intergeneracional, y que debe de ser garantizado.

Attac España



¿Cómo contactar con attac Madrid?

Mándanos un correo a attacmadrid@attacmadrid.org

Escribenos o pásate por Attac: c/ J. Ortega y Gasset 77 2º A 28006 Madrid

O llámanos: Ricardo (678647285) o Françoise (646234840)